	JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	SRPA Palmira
Pág. 1 de 10	FALLO DE TUTELA	Acuerdo PSSA16-10515 (mayo 11 de 2016)

Nro. 108
Acción de Tutela
Radicación Nro. 2020-00118-00

Noviembre once (11) de dos mil veinte (2020)

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Proferir el fallo que en derecho resuelva la acción de tutela instaurada por la señora **ALBA MARY CAMPO MORALES**, contra la **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA -SURA- S.A.** (antes **A.R.L. SURA**), por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición y seguridad social, tal y como enumera en su acápite introductor del escrito de demanda constitucional.

2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS


La accionante manifiesta que, el 4 de mayo de 2020, de forma extemporánea, impetró un recurso de reposición contra el dictamen emitido por la **SEGUROS DE VIDA SURA S.A.**, por medio del cual se determinó un 0,0 % de pérdida de capacidad laboral -P.C.L.-, en relación con una patología originada por un accidente de trabajo.

Indica que, el 30 de septiembre de 2020, elevó un derecho de petición ante la entidad accionada, con el objeto de que se le diera trámite al recurso que había presentado por fuera del término, pues, explica, que ello se debió al aislamiento preventivo obligatorio y las demás restricciones por parte del Gobierno Nacional a causa de la pandemia por la COVID-19.

Señala que, a la fecha de interposición de la presente acción constitucional, ya han pasado más de los 15 días hábiles sin que la parte accionada haya dado respuesta al mencionado derecho de petición.

3. PRETENSIONES

Lo que pretende el accionante con la tutela de su derecho fundamental de petición y seguridad social, es que se le ordene a **SEGUROS DE VIDA SURA S.A.**

	JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	SRPA Palmira
Pág. 2 de 10	FALLO DE TUTELA	Acuerdo PSSA16-10515 (mayo 11 de 2016)

que dé respuesta tanto al derecho de petición como al recurso interpuesto contra el dictamen de pérdida de capacidad laboral.

4. ACTUACIÓN DE INSTANCIA:

4.1. Del trámite procesal


Asignada a este juzgado la presente acción de tutela mediante acta individual de reparto con secuencia Nro. 31886, su conocimiento fue avocado por auto Nro. 0441 del 28 de octubre de 2020. En ese mismo proveído, se dispuso a vincular a las entidades: **MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL -MINSALUD-**, **CONSORCIO PTAR PW**, **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA**, **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**, **EMSSANAR S.A.S.**, **I.P.S. COMFANDI** y a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**. Una vez vinculadas dichas entidades, se dispuso a correrles traslado por el término de dos días para garantizar sus derechos al debido proceso y defensa.

4.2. Réplica de la entidad accionada y de las vinculadas

4.2.1. La **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA** informa no haber recibido solicitud de calificación de Pérdida de Capacidad Laboral para la accionante por parte de ninguna entidad del Sistema de Seguridad social.

4.2.2. La **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** afirma no tener competencia administrativa ni funcional toda vez que, de acuerdo con el Decreto 11 de 2013, la presente entidad solo asume asuntos relacionado a la Administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida en materia pensional. En ese sentido, aduce que a quien le corresponde dar respuesta es a la entidad accionada; razón por la cual, solicita ser desvinculada por falta de legitimación en la causa.

4.2.3. El **MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL -MINSALUD-** de entrada alega la falta de legitimación en la causa por pasiva, aduciendo, que no

	JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	SRPA Palmira
Pág. 3 de 10	FALLO DE TUTELA	Acuerdo PSSA16-10515 (mayo 11 de 2016)


han vulnerado o violado derecho alguno a la accionante. Señala que la responsabilidad recae sobre la entidad accionada. Por lo anterior, solicita que se declare la improcedencia de la presente acción de tutela contra dicha Cartera Ministerial y que se les exonere de toda responsabilidad.

4.2.4. La compañía **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA -SURA- S.A.** (antes **A.R.L. SURA**) corrobora que, efectivamente, la accionante se encuentra afiliada a dicha A.R.L. En cuanto al derecho de petición invocado el 30 de septiembre de 2020, afirma que, el 1º de octubre del mismo año, dio respuesta al derecho de petición incoado por la accionante, la cual fue enviada a la dirección de notificación suministrada por la accionante a través de la empresa de correo **SERVIENTREGA S.A.**, con la Guía Nro. 2061549707, pero, indica, que esta fue devuelta el día 13 de ese mismo mes y año. Por otro lado, señala que la accionante ha formulado otros derechos de petición con la misma pretensión, pero, se le ha reiterado, que no es procedente dar trámite al recurso objeto de este asunto, ya que el dictamen de pérdida de capacidad laboral fue notificado el 15 de marzo de 2020, y el recurso fue presentado el 4 de mayo del corrido año¹. Con todo, pide que se declare la improcedencia de la presente acción constitucional.

4.2.5. EMSSANAR S.A.S. alega la falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que no existe una violación, vulneración o amenaza de los derechos de la accionante por parte de esta entidad. Motivo por el cual, solicita ser desvinculada de la presente acción de tutela.

4.2.6. Las demás entidades vinculadas, no obstante que se les corrió traslado por el mismo término para que en garantía del derecho de defensa y

¹ Inciso segundo del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 de la Ley 019 de 2012: «Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.»

	JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	SRPA Palmira
Pág. 4 de 10	FALLO DE TUTELA	Acuerdo PSSA16-10515 (mayo 11 de 2016)

contradicción pudiera intervenir en este expediente procedimiento, no hicieron pronunciamiento alguno, es decir que guardaron silencio.

5. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

Como condición previa es necesario examinar si se dan en el caso bajo estudio los presupuestos procesales para dictar el fallo.

5.1. Demanda en forma


En el entendido que la acción de tutela ha sido prevista desde la Carta Política como instrumento para la protección de los derechos fundamentales, por ende, de indiscriminado acceso para todas las personas, ha sido despejada de formalismos especiales y sólo impone unos mínimos de información que permiten concitar el aparato jurisdiccional para que aborde el caso concreto que, a la sazón, se cumplen aquí satisfactoriamente en términos del artículo 14 del Decreto 2591 de 1991.

5.2. Competencia del juez

Corresponde a este Juzgado el conocimiento de esta acción constitucional, de conformidad con lo establecido por el propio artículo 86 de la Constitución Nacional, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017 (artículo 2.2.3.1.2.1.-1).

5.3. Legitimidad para actuar.

Entendiendo la legitimación en la causa por activa, como la capacidad para actuar y para ser parte en el asunto, el mismo artículo 86 de la Carta preceptúa que, toda persona, incluidos los extranjeros que se encuentren en el país, tiene la facultad de impetrar ante los jueces de la República, ya sea *«por sí misma o por quien actúe a su nombre»*, la acción de tutela para lograr la protección de los derechos fundamentales, cuando estos se hallen quebrantados o amenazados por una autoridad pública o un particular. En esa dirección, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, permite invocar dicho amparo directamente por el afectado, por su representante legal, apoderado judicial, o a través de un agente oficioso.

	JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	SRPA Palmira
Pág. 5 de 10	FALLO DE TUTELA	Acuerdo PSSA16-10515 (mayo 11 de 2016)

Por tal motivo, es claro que la señora **ALBA MARY CAMPO MORALES**, como persona natural y mayor de edad, con plena capacidad de ejercicio, reviste de total legitimidad para actuar en nombre propio, al considerar que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados.


5.4. Problema jurídico.

Estudiada la causa *petendi*, se tiene que la accionante se duele de la vulneración a su derecho fundamental de petición por cuanto, la petición elevada ante la A.R.L. accionada el 30 de septiembre de 2020, a la fecha de presentación de esta acción de tutela, no ha sido contestada. Dicha Petición consistía en que se le diera tramite a un recurso interpuesto de forma extemporánea contra el dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por esa misma entidad. Por su parte, la compañía **SEGUROS DE VIDA SURA S.A.** estructura su antítesis argumentando que, la petición de marras, fue contestada desde el 1º de octubre del corrido año. Sin embargo, aduce que la resolución fue remitida por correo certificado a la dirección brindada en la misma solicitud para efectos de la notificación, esta es, Calle 34 Nro. 7E-23, pero esta fue devuelta, tal y como figura en la Guía Nro. 2072268175 de la empresa **SERVIENTREGA**. Agregó, que la accionante ha invocado otras peticiones con la misma pretensión, y que están han sido resueltas.

Luego, el problema jurídico que inicialmente deberá plantearse esta judicatura, a guisa de interrogante, será: *¿Se amenaza o vulnera el derecho fundamental de petición al no demostrar la notificación de la resolución a la solicitante, so pretexto de haber sido devuelta por la empresa de correo certificado?*

5.5. Caso concreto.

El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, el cual es del siguiente tenor literal: «*Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general y a obtener pronta resolución.*». Sienta la Corte Constitucional en la Sentencia T-495 del 12 de agosto de 1992, que este derecho adquiere el carácter de fundamental porque se erige incuestionable como el adecuado e idóneo *instrumento* de participación democrática dentro de un Estado Social de Derecho

	JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	SRPA Palmira
Pág. 6 de 10	FALLO DE TUTELA	Acuerdo PSSA16-10515 (mayo 11 de 2016)

como se pregona por el artículo 1º de la misma Norma de Normas. Esto en concordancia con lo presupuestado en el preámbulo de la misma, pues el pueblo colombiano mediante el constituyente del 91, tuvo como objeto el fortalecimiento de la Unidad Nacional de la Nación y proteger a sus integrantes dentro de un «(...) *marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo (...)*». Así pues, no sólo es una herramienta de participación, sino que, además, por medio de este se puede pretender la materialización efectiva de otros derechos constitucionales, tales como, el de información, la libre expresión, la salud, la seguridad social, etc.².

Jurisprudencialmente se ha delineado que para que el derecho de petición se entienda protegido y garantizado, se debe satisfacer el núcleo esencial del mismo. Dicho núcleo se encuentra delimitado, primero, por una **resolución pronta y oportuna** respecto al objeto que se pide, esto es, que se dé en los términos legales establecidos para ella; segundo, por una contestación que sea de **fondo, clara, precisa y congruente**; y, tercero, que sea **puesta en conocimiento** de quien formuló la solicitud. Sin embargo, hay que advertir que lo anterior, no significa que la solución debe satisfacer plenamente las pretensiones del impetrante.


La Corte Constitucional, en Sentencia C-007 de 2017, desde el marco de los fallos constitucionales C-818 de 2011 y C-951 de 2014, describió los elementos que estructuran ese núcleo esencial del derecho fundamental de petición de la siguiente forma:

*«(i) La **pronta resolución** constituye una obligación de las autoridades y los particulares de responder las solicitudes presentadas por las personas en el menor plazo posible, sin que se exceda el tiempo legal establecido para el efecto, esto es, por regla general, 15 días hábiles. Para este Tribunal es claro que el referido lapso es un límite máximo para la respuesta y que, en todo caso, la petición puede ser solucionada con anterioridad al vencimiento de dicho interregno³. Mientras ese plazo no expire el derecho no se verá afectado y no habrá lugar al uso de la acción de tutela⁴.*

² Sentencia C-007 de 2017.

³ Sentencia T-814 de 2005 y T-101 de 2014

⁴ Sentencias T-481 de 1992, T-997 de 1999, T-377 de 2000, T-1160A de 2001, T-220 de 1994, T-628 de 2002, T-669 de 2003. Sobre el momento en que una entidad entra en mora para dar una respuesta de fondo pueden consultarse las sentencias T- 467 de 1995, T-414 de 1995 y T-948 de 2003.

	JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	SRPA Palmira
Pág. 7 de 10	FALLO DE TUTELA	Acuerdo PSSA16-10515 (mayo 11 de 2016)

*(ii) La **respuesta de fondo** hace referencia al deber que tienen las autoridades y los particulares de responder materialmente a las peticiones realizadas. Según esta Corte⁵, para que no se vulnere el derecho fundamental de petición, la respuesta debe observar las siguientes condiciones: **a) claridad**, esto es que la misma sea inteligible y que contenga argumentos de fácil comprensión; **b) precisión**, de manera que la respuesta atienda directamente a lo solicitado por el ciudadano y que se excluya toda información impertinente y que conlleve a respuestas evasivas o elusivas; **c) congruencia**, que hace referencia a que la respuesta esté conforme con lo solicitado; y por último, **d) consecuencia** en relación con el trámite dentro del cual la solicitud es presentada, “de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”⁶.*

*Ahora bien, este Tribunal ha aclarado que la resolución de la solicitud no implica otorgar lo pedido por el interesado, en tanto, **existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido**. En efecto, la **sentencia C-510 de 2004**⁷ indicó que “el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta. No se decide propiamente sobre él [materia de la petición], en cambio si se decide por ejemplo sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo invocado ante la administración para la adjudicación de un baldío, el registro de una marca, o el pago de una obligación a cargo de la administración”. Así, **el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma**, en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal.*

*(iii) La **notificación de la decisión** atiende a la necesidad de poner al ciudadano en conocimiento de la decisión proferida por las autoridades, ya que lo contrario, implicaría la desprotección del derecho de petición⁸. La notificación en estos casos, se traduce en la posibilidad de impugnar la respuesta correspondiente. Frente a este elemento del núcleo esencial de la petición, esta Corte ha explicado que es la administración o el particular quien tiene la carga probatoria de demostrar que notificó al solicitante su decisión, pues el conocimiento de ésta hace parte del intangible de ese derecho que no puede ser afectado⁹.» (Negritas del texto original y Subrayas del Juzgado)*

Hay que resaltar que, con ocasión a la respuesta, esa misma corporación ha establecido que existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a lo pedido, ya que no es imperativo para la administración dar una respuesta positiva¹⁰. Así pues, en Sentencia T-063 de 2000, esa Corporación puntualizó:

«En primer lugar cabe señalar que existe una diferencia esencial entre el derecho de petición y el derecho a lo pedido, en cuanto el primero de ellos,

⁵ Sentencias T-610 de 2008 y T-814 de 2012.


⁶ Sentencia T-610 de 2008.

⁷ Sentencia C-510 de 2004.

⁸ Sentencias T-259 de 2004 y T-814 de 2005.

⁹ Sentencia T-149 de 2013.

¹⁰ Sentencia T-867 de 2013.

	JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	SRPA Palmira
Pág. 8 de 10	FALLO DE TUTELA	Acuerdo PSSA16-10515 (mayo 11 de 2016)

consagrado en el artículo 23 de la Carta, hace referencia a la facultad que tienen las personas de elevar solicitudes respetuosas ante las autoridades, en la seguridad de obtener de ellas una pronta y oportuna respuesta que debe hacerse conocer en debida forma al interesado, y que materialmente responda las inquietudes o asuntos planteados. Este derecho, en los distintos aspectos que lo componen y que han sido analizados por la doctrina de la Corte, puede ser objeto de amparo constitucional en sí mismo y con independencia del contenido de las peticiones. Al respecto se pueden consultar, entre muchas otras, las sentencias T-418 de 1992 (Sala Séptima de Revisión), T-575 de 1994 y T-228 de 1997 (Sala Quinta de Revisión) y T-125 de 1995 (Sala Tercera de Revisión).


*Por su parte, **el derecho a lo pedido** hace alusión a aquel que se pretende defender, o cuyo reconocimiento se busca a través del ejercicio del derecho de petición. El objeto de la solicitud, que no interesa para los fines de la garantía constitucional, en los términos expuestos, tiene en cambio relevancia frente a la normatividad que regula el ejercicio de esos otros derechos, canalizados en su ejercicio por la vía de la solicitud elevada ante la autoridad competente. **Esta, respecto del fondo de la petición, no está obligada a absolverla favorablemente y, en todo caso su decisión, si así lo quiere el solicitante por considerar que sus derechos son violados con la respuesta negativa, está llamada a debatirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo**, en tanto, como lo ha dicho la jurisprudencia, ya no está en juego el derecho fundamental de que trata el artículo 23 de la Carta, "sino otros derechos, para cuya defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código Contencioso Administrativo y, por tanto, respecto de ella -esa hipótesis- no cabe la acción de tutela salvo la hipótesis del perjuicio irremediable (artículo 86 C.N.)" (Cfr. Sentencia T-242 del 23 de junio de 1993).»*

También ha sentado la doctrina constitucional que:

*«El derecho de petición faculta a toda persona a elevar solicitudes respetuosas a las autoridades públicas –y en casos especiales a los particulares-, e involucra al mismo tiempo la obligación para la autoridad pública de emitir una respuesta que, si bien no tiene que ser favorable a las pretensiones del peticionario, sí debe ser oportuna, resolver de fondo lo requerido por el peticionario y ser puesta en conocimiento del mismo. El derecho de petición exige por parte de las autoridades, una decisión de fondo a lo requerido por el ciudadano. **Esto implica la proscripción de respuestas evasivas o abstractas, ello no quiere decir que necesariamente la respuesta deba ser favorable. La respuesta de fondo implica un estudio sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición**¹¹.» (Negrilla adrede)*

En nuestro caso, se tiene que la señora **ALBA MARY CAMPO MORALES**, haciendo uso de su derecho de petición, cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 15 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que a su vez fue sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, en ejercicio pues del

¹¹ Sentencia T-441/13


	JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	SRPA Palmira
Pág. 9 de 10	FALLO DE TUTELA	Acuerdo PSSA16-10515 (mayo 11 de 2016)

fundamental derecho contemplado en el artículo 23 de la norma superior, el 30 de septiembre de 2020, radicó ante la entidad accionada, una petición por medio de la cual, suplicaba que se le diera trámite al recurso interpuesto contra el dictamen emitido por el ente accionado en relación con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la misma, el cual, al parecer, fue elevado de forma extemporánea. Empero, a la fecha de presentación de la presente acción de amparo constitucional, no ha recibido respuesta. Por otra parte, de acuerdo con lo indicado por la E.S.P. demandada al momento de descorrer traslado, al parecer, la solicitud de marras fue tramitada y contestada mediante el oficio Nro. CE202031014687 del 1º de octubre de 2020. No obstante, indica la A.R.L. imputada, que la resolución fue remitida para su notificación, a través de la Guía Nro. 2072268175 de la empresa de correo certificado **SERVIENTREGA S.A.**, a la dirección que la interesada puso para esos efectos en su deprecación, esto es, «*Calle 34 no 7E-23 barrio buenos aires de Palmira-Valle*»; pero, esta fue devuelta.

Corolario, con la devolución de la respuesta emitida por la compañía demandada a la deprecación elevada por la accionada, tal y como se observa en la Guía Nro. 2072268175, fulge evidente que la notificación de la decisión, como elemento del núcleo esencial de este fundamental, nunca fue satisfecho. A la sazón, esa constancia de no entrega emitida por la empresa de correo certificado, se torna como prueba incontrovertible de que se ha conculcado el derecho de petición, pues el contenido de la resolución nunca fue puesto en conocimiento de la accionante. En consecuencia, se le ordenará a la A.R.L. **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA -SURA- S.A.** que, dentro de las de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, notifique a la accionante el contenido de la respuesta emitida a la petición radicada el 30 de septiembre de 2020, a los mismos datos de notificación dispuestos en el escrito de la presente solicitud de amparo constitucional.

6. DECISIÓN:

Con base en lo expuesto, **EL JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE PALMIRA VALLE**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,

	JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	SRPA Palmira
Pág. 10 de 10	FALLO DE TUTELA	Acuerdo PSSA16-10515 (mayo 11 de 2016)

RESUELVE:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición de la señora **ALBA MARY CAMPO MORALES**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la compañía **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA -SURA- S.A.** que notifique a la señora **ALBA MARY CAMPO MORALES**, identificada con la C.C. Nro. 38.705.109, el contenido de la respuesta emitida a la petición radicada el 30 de septiembre de 2020, a los mismos datos de notificación dispuestos en el escrito de la presente acción de tutela. Lo cual, deberá realizarse en el término de las **CUARENTA Y OCHO (48) HORAS** contadas a partir de la notificación de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la compañía **SEGUROS DE VIDA SURA S.A.** que, una vez finalizado el término indicado en la disposición anterior, rinda informe a este juzgado respecto del cumplimiento de la misma, a fin de evitar iniciar en su contra el correspondiente trámite de cumplimiento establecido en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 o en su defecto, incidente de desacato conforme al artículo 52 de esa misma normativa.

CUARTO: Notificar este fallo por el medio más expedito conforme lo establece el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Contra este fallo procede la impugnación dentro de los tres días siguientes a su notificación, conforme lo indica el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: Si el fallo no es impugnado se enviará el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

El juez,


OSCAR RAYO CANDELO